

LA CAMPAÑA POLÍTICA Y LAS EMERGENCIAS AMBIENTALES

El debate ausente

La situación de las aguas, los abusos de un modelo basado en el agronegocio y una institucionalidad pública débil y contradictoria son las tres preocupaciones más comunes entre el activismo y la academia. Desde el Frente Amplio se asume que la estrategia de crecimiento que primó en Uruguay ha tenido “costos ambientales”, pero que los candidatos no han tomado la cuestión. Con ese diagnóstico, el partido citó a los cuatro por separado para tratar de instalar los ejes de su programa ambiental.

ROSARIO TOURIÑO

EN EL ÚLTIMO verano hubo una floración que nada tuvo de romántica, porque obligó a los guardavidas de la costa de Montevideo, Canelones, Maldonado y Rocha a clavar sobre sus casetas las banderas sanitarias de la cruz verde. Desde hace varios años, activistas y científicos alertan sobre los impactos que el modelo productivo aplicado en Uruguay viene provocando en los ecosistemas, pero pocas veces una crisis ambiental se expresó de una manera tan gráfica. Esta vez el daño no era denunciado por un ignoto trabajador del arroz obligado a laborar sin condiciones mínimas de seguridad con equipos plagados de agrotóxicos ni por maestras de una escuela fumigada de un remoto pueblo. Ahora, la peor superpoblación de cianobacterias de la historia reciente eclosionaba en uno de los espacios públicos más democráticos y cernía nuevos nubarrones sobre las perspectivas de la temporada turística. Sin embargo, a pesar de las inquietantes imágenes de las aguas teñidas con el verde tóxico de las algas, la cuestión ambiental no está permeando el debate de la actual campaña política, aunque —con algunas excepciones— es difícil identificar algún asunto discutido en profundidad.

Con la idea de estimular la discusión, **Brecha** decidió consultar a referentes que vienen militando o investigando las cuestiones ambientales desde hace años. Luego de ese ejercicio, se pasó a cotejar lo que plantean los partidos de izquierda en la materia, en función del indudable intercambio de militantes que suelen experimentar con las organizaciones sociales. En el caso del FA, si bien en sus “bases programáticas” existe un considerable espacio dedicado al asunto, ninguno de los cuatro precandidatos se ha adentrado en el área, más allá de generalidades como “hay que cuidar el medioambiente” o “hay que ir hacia un desarrollo sustentable”. De hecho, los referentes de la Unidad Temática de Medio Ambiente del FA los han convocando para intentar que la cuestión esté más presente en sus discursos (véase la entrevista con dos de sus referentes). En el caso de Unidad Popular, los temas ambientales son casi inherentes a una formación declarada anticapitalista (véase recuadro). Pero veamos

primero cuáles serían las medidas impostergables para el Uruguay de los próximos cinco años, en la mirada de los entrevistados.

AGUA QUE NO HAS DE BEBER. Si hay un tema unánime entre los ambientalistas consultados, es la situación de las aguas uruguayas. “*Dentro de lo que han sido los diagnósticos de los últimos años, hay un consenso bastante general en que los síntomas más preocupantes han ido ocurriendo en los recursos acuáticos, porque son como una suerte de sumidero de muchas actividades que ocurren en el territorio, en el uso del suelo y en las ciudades*”, comentó Luis Aubriot, doctor en ciencias biológicas (Facultad de Ciencias, UDELAR). El científico ha venido alertando permanentemente sobre procesos que tuvieron su cénit en el verano. En ese punto, Aubriot propone varias acciones: definir zonas de amortiguación en los cursos de agua en todo el territorio para conservar los recursos hídricos y la biodiversidad (“*que no sea sólo en zonas específicas, como el Santa Lucía o como, en el futuro cercano, el Río Negro, sino que sea una política de protección de los recursos; van a tener que existir zonas de exclusión, no se puede cultivar y fertilizar hasta la orilla del curso acuático*”) y, también, definir cuencas prioritarias y nuevas áreas protegidas asociadas a la conservación de recursos hídricos.

El modelo productivo es el otro gran punto de disputa que aparece señalado por el científico, pero también por los activistas consultados del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) y Redes-Amigos de la Tierra. Aubriot apunta que “*se debería definir cuál es el siguiente modelo de producción a desarrollar*”. En esta línea, plantea incentivar “*la agroecología sobre el agronegocio*”, desarrollar “*nuevos planes de uso del suelo basados en el control del uso de fertilizantes y de agrotóxicos, y prohibirlos en zonas prioritarias*”. Otra cuestión ineludible sería modernizar las normativas para el tratamiento de efluentes urbanos, pecuarios e industriales y darles “*potestades vinculantes*” a las comisiones de cuenca (“*para justamente poder recoger estos conflictos de manera un poco más democrática, porque se ha desmotivado mucho la participación de*

las organizaciones e incluso de la academia”). Sobre esta cuestión, si bien desde el FA se asume que los modos de participación social frente a los emprendimientos no han sido los mejores, en la Comisión de Programa no fueron partidarios de convertir en obligatorias las conclusiones de las comisiones de cuenca.

Por último, Aubriot considera que se deben fortalecer las capacidades técnicas y de recursos humanos para “*el monitoreo, control e investigación científica de los problemas ambientales*”, y generar capacidades de predicción de fenómenos complejos, como son los cambios productivos en el uso del suelo, en un contexto de variabilidad climática y calentamiento global. “*En Uruguay estamos aún en pañales en el desarrollo de las capacidades técnicas, e incluso se han desalentado varias iniciativas de desarrollo tecnológico moderno para el estudio de ecosistemas acuáticos, incluso para el uso de datos abiertos y los generados por investigaciones científicas*”, describió, en referencia al polémico decreto 115/018 que reglamenta la ley de recursos hidrobiológicos¹. A pesar de ello, el biólogo valora la evolución que ha tenido la Dirección Nacional de Ambiente (DINAMA) en los últimos años: “*Ha mejorado mucho sus capacidades, en particular en la calidad y cantidad de recursos humanos especializados en ciencias ambientales y ecología acuática. Y se ha mejorado también la cooperación de trabajo con la UDELAR*”.

DECIR QUE NO. “*El tema ambiental está invisibilizado en la campaña, pero tampoco está demasiado bien expresado en los programas (de los partidos políticos). Es un tema fraccionado, sin la necesaria unidad*”, resume Raúl Viñas, del MOVUS. Este movimiento, muy activo cuando aún respiraba el proyecto de Aratirí, al igual que UPM 2 No (cuya cara más visible es Hoenir Sarthou), marca una férrea oposición al contrato firmado entre el gobierno uruguayo y la multinacional UPM.

El primer concepto elegido por Viñas es “sustentabilidad” y lo explica así: “*Hay una frase en el programa del FA que dice que hay que priorizar los emprendimientos que tengan sustentabilidad ambiental. Es una frase engañosa, porque no es priorizar, sino rechazar los que*

directamente no la tengan. Y eso se ve en la política de la DINAMA, que es la de remediar efectos, pero la sustentabilidad implica que no suceda algo”. En cuanto a UP, opina que es un programa “*a los golpes, con puntos claros y contundentes*”, pero sin una correlación de fuerzas que le permita prosperar en el Parlamento.

La postura del MOVUS es fuertemente cuestionadora: “*En este país vamos de un proyecto mesiánico al siguiente, pasamos de Aratirí a UPM 2, pero dejamos de lado la posibilidad de lograr un desarrollo sustentable real, con base en cosas más manejables, pequeñas, entendibles; con la mitad del apoyo que hoy se le piensa dar a UPM se podrían hacer cosas gigantescas*”. Viñas proporciona algunos ejemplos. En el caso de la miel, la detección de niveles de glifosato y la caída del precio ha sumido a la apicultura en una crisis. Los productores reciben 2 dólares por quilo, cuando en Europa está a 18 euros. “*Hoy está en manos de mayoristas que las venden en tarrinas de 200 litros y eso no deja nada para el país. Tendríamos que cuidar la producción, envasarla en pequeñas cantidades, como marca país, y venderla como hacen en Italia con un chianti*.” Pero el activista se introduce asimismo en el rubro de la soja, estrella de los picos de la bonanza reciente: “*En Uruguay, el 90 por ciento se exporta como poroto de soja: procesamiento cero. En Argentina, el 85 por ciento se vende como harina —por lo menos la pasan por un molino— o como aceite*”.

El segundo punto central para Viñas es el ordenamiento territorial: “*No está cambiando para bien*”. La ley de ordenamiento territorial (18.308, de 2009) para él fue “*bien pensada*”, al punto de que fue resistida incluso por los partidos tradicionales, “*porque impone cierta limitación a lo que se puede hacer o no en determinadas áreas rurales*”. Pero entiende que luego el gobierno comenzó a perforarla: “*Anulamos un montón de cosas buenas y hace unos días salió un Frankenstein de la Cámara de Diputados, porque se creó un ordenamiento especial para la franja costera*”. Viñas también cuestiona las recategorizaciones de suelo a medida de emprendimientos. Por último, se detiene en la institucionalidad: “*Se ha generado una burocracia*

ambiental. Tenemos el MOVOTMA, con las direcciones de Ambiente, de Agua y de Ordenamiento Territorial, pero después tenemos en el Ministerio de Ganadería la Dirección de Recursos Renovables y la de Recursos Acuáticos. Hablar de recursos renovables en un ministerio de Agricultura, cuando sabemos que su objetivo no es la preservación...”. Por otro lado —describe—, Presidencia crea una Secretaría de Medio Ambiente a la que se le suma el cambio climático, cuando se había presupuestado también una dirección de Cambio Climático en el MOVOTMA. “*Entonces, tenés un montón de jerarcas, que, cuando llega el momento de operar sobre un recurso que estamos dañando, como el agua, no sabés por dónde empezar*.”

OTRA FORMA DE PARARSE. El encare de Redes-Amigos de la Tierra incluye conceptos geopolíticos, con un énfasis en la soberanía no sólo de Uruguay, sino de la región. “*Un gobierno de izquierda debe comprometerse con la justicia ambiental, si queremos avanzar en la realización de derechos y si queremos avanzar en la justicia social, económica y de género. Hay una apropiación del territorio y las empresas trasnacionales tienen cada vez más poder, más que el gran capital nacional, porque son quienes definen cómo se gestionan los territorios. No estamos hablando de lo ambiental como un lujo, sino de derechos fundamentales para la vida, como el derecho al agua, a la salud y a la alimentación*”, plantea Karin Nansen, coordinadora de la ONG en Uruguay, y también presidenta de Amigos de la Tierra Internacional.

Nansen apunta que se atraviesan profundas crisis socioambientales —como la climática, la de biodiversidad y la del agua— que afectan mayormente a quienes menos han contribuido a provocarlas: “*La tierra y los bienes de la naturaleza tienen que ser públicos, comunes, pero cuando avanza la concentración y extranjerización de la tierra, por ejemplo a partir de la expansión del agronegocio y los monocultivos, priman los intereses privados*”. La coincidencia con los demás entrevistados es total sobre la necesidad de un cambio del paradigma productivo, con un decidido impulso hacia la agroecología: “*Llamamos a un cambio radical del modelo*

POLÍTICA



Playa Ramírez afectada por la presencia de cianobacterias en enero, en Montevideo / FOTO: ADHOC, NICOLÁS CELAYA

de producción del agronegocio; a fortalecer y expandir los sistemas diversificados agroecológicos de producción de alimentos sanos que ya existen. Ello exige destinar recursos económicos para la implementación del Plan Nacional de Agroecología, a ser diseñado por las organizaciones sociales y las instituciones del Estado”.

Redes también hace énfasis en la necesidad de un nuevo modelo de inserción internacional y de

política de inversiones: “Hoy el espacio de la política pública está amenazado por los acuerdos de libre comercio y de inversiones, así como contratos inversionista-Estado (como el firmado con UPM) que consolidan el poder de las transnacionales y lo que denominamos una arquitectura de la impunidad. Por un lado, las transnacionales inician demandas millonarias contra nuestro país en tribunales arbitrales internacionales profundamente

antidemocráticos, como lo hemos visto ya en los casos de Philip Morris, Italba, Aratirí, entre otros, y, por otro, logran evadir la justicia cuando cometen violaciones de derechos humanos”.

¿ZURDOS O ECLÉCTICOS? En las últimas elecciones para el Parlamento Europeo, se produjeron algunos fenómenos en paralelo, como el alarmante ascenso de los partidos de ultraderecha, a la par de un intenso deterioro de la socialdemocracia y las izquierdas radicales.² Sin embargo, de la mano de un potente voto joven, los partidos verdes crecieron en muchos países y hay quienes aventuran incluso un posible triunfo en Alemania (aunque *Deutsche Welle Internacional*, 9-VI-19, no descarta que el controvertido Partido Verde germano construya una alianza con los conservadores de Angela Merkel). Nansen explica que la preocupación por el cambio climático y la crisis de la biodiversidad han permeado mucho en las sociedades europeas. Algo similar cuenta Viñas: “Hemos seguido la campaña en Finlandia, y los temas principales fueron el calentamiento global y la posibilidad de ese país como lugar para secuestrar carbono; aquí se discute si un candidato vive en un barrio privado o quién está detrás de las encuestas mexicanas de otro candidato. No estamos debatiendo cómo va a ser el Uruguay de los próximos 30 años”.

Otra cosa señalada por los activistas es el ninguneo al que son sometidos a menudo desde el gobierno. “Se han generado ciertos conflictos emblemáticos que han polarizado la discusión y han puesto al ambientalismo del otro lado del progreso o el desarrollo económico, como si fuera un ancla. La discusión se ha ridiculizado así, incluso desde el MGAP. Y varios académicos hemos sido adjetivados en discusiones sobre la nueva ley de riego, o con la interpretación de ciertos fenómenos que ocurren en el agua. Hay una especie de dicotomía que se tendría que terminar”, resume Aubriot. A su criterio, recién ahora se está empezando a hablar de la agroecología como una alternativa, porque se está viendo que el modelo productivo que utiliza ciertos agrotóxicos empieza a generar problemas en las exportaciones o en el turismo. “Es muy difícil para esos jóvenes interesados en estas políticas —analiza— desarrollar sus ideas, por el rechazo a la palabra ‘ambiental’.”

Un elemento que también se percibe es cómo las izquierdas han dejado que la agenda ambiental sea tomada por los partidos tradicionales. Así, se ha visto cómo el fenómeno de eutrofización de las aguas ha sido expuesto por el colorado Ernesto Talvi (con la asesoría de Eduardo Blasina). Y más recientemente ha sorprendido el planteo de Guido Manini Ríos

contra la instalación de UPM, teñido con su inconfundible toque nacionalista. También los ruralistas de Un Solo Uruguay han acompañado a los grupos opuestos a la inversión finlandesa, sintonía que ya se había divisado en las marchas contra la minería a cielo abierto (“Uruguay Libre”). Viñas dice que “hubo un tiempo en que los movimientos sociales” veían con buenos ojos “los postulados de una izquierda que aparecía como ambiental, pero hoy no, porque algunos votan cosas con las que incluso no están de acuerdo”. Y, a su vez, que el Movus no mira “el color” de quienes se acercan, sino la común preocupación por lo que va a pasar con los recursos naturales. Nansen, en contraposición, coloca desde el vamos la palabra “izquierda” en el planteo: “Nuestra agenda toma distancia del supuesto ambientalismo que pregonan quienes exigen la reducción del gasto público y la eliminación de las políticas sociales. Los mismos que en el pasado trataron de imponer la privatización y venta del país. Hoy hablan de lo ambiental, pero han hecho todo lo contrario”. ■

UNIDAD POPULAR La agenda rojiverde

UNIDAD POPULAR TIENE en su programa un bloque ambiental con medidas de fuerte tono imperativo.¹ Así, la fuerza que postulará al historiador Gonzalo Abella a la presidencia propone: anular la nueva ley de riego y el contrato firmado para la instalación de UPM, prohibir los agrotóxicos nocivos y crear un nuevo gabinete de bioseguridad, en el que el MSP, la DINAMA y la UDELAR tengan poder de veto. También, entre otros múltiples ítems, exigen prohibir el fracking (el FA propone extender el plazo “de moratoria”; también en el caso de los transgénicos), rechazar proyectos como el de la regasificadora de Puntas de Sayago y que la participación de la sociedad civil en los consejos de cuenca sea “vinculante” (es decir, que no sean meros organismos asesores).

Otros dos partidos políticos, con una declaración ecologista en su propia denominación, competirán en las elecciones: el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI, del ingeniero agrónomo César Vega, que en 2014 estuvo muy cerca de lograr un diputado) y el Partido Verde Animalista (liderado por el mediático abogado Gustavo Salle). ■

1. El texto puede leerse en: <https://www.unidadpopular.org.uy/single-post/2019/02/07/Programa-de-la-Unidad-Popular-2019>.

1. Véase “Con espinas”, por Mónica Robaina, en *Brecha*, 13-VII-18.

2. Véase “Amarrados”, por Daniel Gatti, en *Brecha*, 31-V-19. Entre otros resultados, el voto ecologista logró 20 diputados más en el europarlamento que en 2014.